



La presente obra está bajo una licencia:
Atribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5)
Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/>

Usted es libre de:

- Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas
- hacer un uso comercial de esta obra



Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).

El cumplimiento de los principios de la Contratación Pública en Colombia al utilizar subasta inversa electrónica

Compliance with the principles of public procurement in Colombia when using electronic reverse auction

Universidad Católica de Colombia¹

Resumen

Los avances tecnológicos han generado transformaciones en el mundo del derecho, en la actualidad se han desarrollado herramientas tecnológicas que se utilizan para el desarrollo de actividades judiciales. Colombia es un país que ha procurado estar en constante evolución; debido a que las sociedades del mundo así lo exigen. Es importante mencionar que, en el año 2008 surgió la figura de la subasta inversa electrónica a través de la Ley 1150 del año 2007, con el fin esencial de realizar contratos Estatales a través de una reciente página web conocida como Secop II. Aunque son muchos los avances que se han generado gracias a las nuevas tecnologías; aún se evidencian posiciones que comparten la idea de si este método es por esencia un garante de los principios que señala la Ley 80 de 1993. Por tal motivo, la presente investigación se encuentra enfocada a resolver el problema jurídico basado fundamentalmente en sí; ¿Ejecutar un contrato estatal utilizando la figura de subasta inversa electrónica cumple con los principios rectores que consagra la Ley 80 del año 1993; en el entendido que al realizar esta practica se están priorizando los medios electrónicos y no la forma presencial? En consecuencia, se debe establecer la efectividad de los medios electrónicos para llegar a una conclusión.

Palabras Clave: Colombia, Nuevas Tecnologías, Contratación Estatal, Gobierno en Línea, Principios Fundantes, Medios Electrónicos, Validez, Eficacia, Subasta Inversa Electrónica.

Abstract

¹ Artículo de investigación presentado como requisito para optar por el título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia, bajo la asesoría del Doctor Harold Alexander Alarcón Quiroga, docente de la facultad de Derecho.

“Estudiante en proceso de grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia identificado con el código estudiantil 2111824 y correo electrónico: jssanchez24@ucatolica.edu.co.

Technological advances have generated transformations in the world of law, currently technological tools have been developed that are used for the development of judicial activities. Colombia is a country that has tried to be in constant evolution; because the societies of the world demand it. It is important to mention that, in 2008, the figure of the electronic reverse auction emerged through the Organic Public Procurement Law, in order to make State contracts through a website known as Secop II. Although there are many advances that have been generated thanks to new technologies; positions that share the idea of whether this method is essentially a guarantor of the principles established by Law 80 of 1993 are still evident. For this reason, this research is focused on solving the legal problem based fundamentally on itself; Does executing a state contract using the electronic reverse auction figure comply with all the requirements of suitability, validity, efficiency and also with the guiding principles established by Law 80 of 1993; In the understanding that when doing this practice, electronic media are being prioritized and not face-to-face? Consequently, the effectiveness of electronic means to reach a conclusion must be established.

Keywords: Colombia, New Technologies, State Procurement, Online Government, Fundamental Principles, Electronic Means, Validity, Efficacy, Electronic Reverse Auction.

Sumario

Introducción, 1. Naturaleza jurídica de la subasta inversa electrónica, 2. El proceso de Licitación Pública, 3. Subasta inversa electrónica en relación con la licitación pública, 3.1. Fallas técnicas de la subasta inversa electrónica, 5.Principios de la contratación estatal. 6. Cumplimiento de los principios al emplear la subasta inversa electrónica. Conclusiones. Referencias.

Introducción

En el presente escrito, se pretende demostrar como el uso de las nuevas tecnologías para los procedimientos judiciales han ido desarrollándose cada vez más con el fin de obtener una descongestión mas efectiva. Además, se pretende responder el problema jurídico que se basa principalmente en si: ¿Ejecutar un contrato estatal utilizando la figura de subasta inversa electrónica cumple con los principios rectores que consagra la Ley 80 del año 1993; en el entendido que al realizar esta practica se están priorizando los medios electrónicos y no la forma presencial?

Sin embargo, en el ámbito de contratación Estatal poco estudio se tiene en lo concerniente a la subasta inversa electrónica debido a la inseguridad que produce en muchos doctrinantes. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que la figura surgió para hacer mas ágil la Administración Pública y asimismo destacar los principios que consagra la Ley 80 del año 1993, específicamente con lo concerniente a la transparencia; principio que funge como uno de los más importantes a la hora de contratar de manera electrónica con el Estado. Es por esta razón que, se torna adecuado realizar un aporte al mundo del derecho; estudiando y analizando la aplicación de los principios llevados a cabo a través de la subasta inversa electrónica, específicamente en procesos de Licitación Pública y de igual forma, explicar con mayor profundidad la implementación de la subasta inversa electrónica para así contrarrestar con el desconocimiento y alejar cualquier duda que se pueda tener.

Es importante tener en cuenta que en un Estado Social de derecho como lo es Colombia, la administración de justicia juega un papel fundamental en el manejo y representación idónea de todas sus entidades administrativas, en aras de preservar los derechos fundamentales, los principios constitucionales y a la sociedad misma. En el artículo segundo de la Constitución Política del año 1991 se estipulan todos los fines del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, promover la prosperidad general, entre otros. Por otra parte, el artículo 209 constitucional le otorga el campo a la función administrativa como servidora de todos los intereses generales de los involucrados, garantizando así los principios esenciales de economía, eficacia, moralidad, celeridad, igualdad, imparcialidad y publicidad, entre otros. Todos estos preceptos son realmente importantes a la hora de participar o ejecutar algún cargo en el ámbito de la administración pública, de lo contrario

vulnerarían los fines esenciales del Estado. (Constitución Política, Artículo 209)

Es importante mencionar que el Estado siempre ha sido el encargado de contratar. Sin embargo, a partir del año 1976, se expidieron diversas normas para regular la materia y asimismo garantizar su desarrollo. Es valioso anotar que desde la regulación e implementación de este concepto se ha querido preservar los fines estatales, la búsqueda de la eficacia y la facultad de transparencia para todos los procedimientos de compra, pues así se encuentra consagrado taxativamente en la Constitución Política del año 1991. De tal manera que, el presente trabajo busca establecer con estudios previos si realmente la subasta inversa electrónica cumple con los fines esenciales del Estado, para ello, se contará con la ayuda de la legislación vigente.

Por su parte, la subasta inversa se encuentra consagrada en la Ley 1150 del año 2007, en la cual se establece que, “La subasta inversa se define como una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado, esperando que fuera un instrumento idóneo en la administración del recurso público” (Congreso de la República, 2007, Artículo 3)

Como consecuencia, se debe tener en cuenta primordialmente que “La subasta inversa es una modalidad de contratación pública, ágil, segura y transparente que permite a las entidades estatales facilitar la adquisición de bienes y/o servicios con una mayor cobertura de oferentes y mejores precios” (Mosquera, 2018, Pág. 12)

Por consiguiente, la Ley 80 de 1993 ha sido una de las normas más relevantes para la regulación de la Contratación Estatal, mediante esta Ley se establecen los principios rectores que rigen en la contratación; específicamente en las reglas de interpretación y también para seguir las actuaciones y conductas de los servidores públicos. Por esta razón, para el Doctor Edgar González López manifiesta que,

El estatuto de la contratación estatal no es solo la aplicación de normas de procedimiento de selección del contratista y a las demás normas técnicas que en dicho estatuto se consagran; sino los principios como normas rectoras que tienen el fin de guiar los procesos contractuales (González, 2010, pág. 61).

Conforme a lo anteriormente dicho, la subasta inversa al ser una figura objeto de estudio de la Ley 80 del año 1993, se caracteriza principalmente por ser una modalidad de selección por medio de la cuál una entidad realiza una adquisición de bienes y una contratación de

servicios comunes por medio de una oferta pública. En otras palabras, la subasta inversa se puede llevar a cabo mediante;

Un proceso de Licitación Pública, Concurso Público, o Adjudicación Directa, al encontrarse definidas las características del bien, lo que se va a evaluar únicamente es el precio, porque se entiende que todos los bienes que se propongan tienen idéntica característica técnica al tratarse de bienes comunes. (Pérez, 2018, p, 28)

Para muchos doctrinantes, se encuentra una falencia en la modalidad de la subasta inversa en Colombia, en el entendido en que esta se encuentra limitada a la puja con base en el precio. Otro de los aspectos más relevantes se deriva de la página web oficial de las contrataciones públicas que tuvo su surgimiento principalmente para atender todas las compras virtuales y que se caracteriza por ser una herramienta de eficiencia y transparencia; creada en el año 2015, convirtiéndose en una plataforma transaccional, en donde se le permite a los compradores y vendedores realizar todo el proceso de la subasta inversa electrónica, se debe tener en cuenta que; las Entidades Estatales tienen una comunicación completamente abierta y regulada con los sectores privados. Además, es una plataforma trascendental para efectos de la publicidad. De tal manera que le permite tanto a los compradores como proveedores realizar el proceso de contratación de forma virtual. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que; “La Entidad Estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente” (Pérez, 2018, pág. 6).

En este orden de ideas, en dado caso en que la entidad Estatal decida voluntariamente realizar la subasta inversa por vía electrónica, entonces deberá establecer los pliegos de condiciones al sistema que empleará para la subasta y tener en cuenta todos los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensaje de datos. Particularmente el proceso de subasta inversa electrónica “es un proceso dinámico de negociación de precios online entre proveedores preseleccionados, desapareciendo así la relación personal con el cliente, para que esta sea manejada por medio del internet”. (Pérez, 2018, pág. 7).

Es importante expresar que de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.6. Del Decreto 1082 de 2015 se encuentra que,

Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser

suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la Entidad Estatal debe reiniciar la subasta. (Decreto 1082, 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.6)

Lo anterior deduce que, se pueden presentar falencias y que esta situación en la práctica se puede volver completamente normal, en dado caso; que por causas imputables al oferente o al proveedor con respecto a las soluciones de tecnología, en el ejercicio de la subasta inversa electrónica la conexión se pueda perder, en este orden de ideas; el ejercicio de la subasta deberá continuar y la entidad Estatal da por entendido que el proveedor al perder la conexión, desistió en la participación.

1. Naturaleza Jurídica de la subasta inversa electrónica

Como ya se vió anteriormente, la subasta inversa electrónica es una herramienta que se creó principalmente para realizar de forma más rápida aquellos procedimientos en materia de Contratación Estatal. Con el surgimiento de la Ley 80 del año 1993 se fue regulando todos los aspectos de las contrataciones públicas en Colombia. Además de ello, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia le aporta cierta importancia al tema con los principios y fines esenciales que se deben cumplir en el Estado. En consecuencia, la figura de la subasta inversa electrónica se caracteriza fundamentalmente por transmitir eficiencia y transparencia. Así las cosas, la razón primordial para implementar el modelo de subasta inversa en el país sería;

El ahorro que presentó para las arcas estatales, según la exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007. Igualmente funcionaría por su agilidad y simplicidad, la mejor garantía de la rectitud en el manejo de los recursos públicos involucrados, reduciendo los costos de transacción que encarecen la contratación pública (Montoya, 2012, p. 5).

Por consiguiente, se tiene que la subasta inversa electrónica es un modelo diferente para la contratación estatal ya que es un mecanismo completamente novedoso que aporta dinamismo al sistema de compras públicas, además que le otorga un importante auge a los medios tecnológicos. Es importante aducir que con la Ley 527 del año 1999 se le concedió cierta reglamentación a los medios electrónicos e implementó bastante seguridad a los mensajes de datos; específicamente para las transacciones comerciales. Es por esta razón que el artículo segundo de la ya mencionada Ley establece que; “las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización

de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar (...)” (Congreso de la República, 1999)

Por otro lado, es necesario mencionar que con la figura de la subasta inversa electrónica y el respaldo de la Ley 527 del 99, surge cierta confianza al realizar los procedimientos por este medio y no por otro. De tal manera que, en la página oficial de SECOP II, el comprador ofrecería expresamente sus necesidades y el vendedor ganaría con el precio más bajo, pues así es como funciona el procedimiento de subasta inversa.

Visto lo anterior, es imprescindible establecer que la subasta inversa electrónica es básicamente una puja dinámica, utilizada principalmente para lograr adquirir bienes o servicios de distinta índole, en donde los proveedores deben realizar como ya se dijo; una puja y entre más baja la oferta más factible se puede adjudicar el contrato. En otras palabras:

La Subasta Inversa es un procedimiento dinámico, por medio del cual, los proveedores de bienes y servicios estandarizados u homologados, pujan hacia la baja el precio ofertado durante un tiempo determinado y cumpliendo previamente los requisitos que la entidad contratante haya establecido en los respectivos Pliegos de Condiciones. (Montoya, 2012, p.2)

Otros autores tales como el Doctor Cristobal Vaca un importante tratadista, manifiesta que;

Subasta inversa es un mecanismo de contratación “residual” (residual=parte o proporción que queda de un todo), es un procedimiento precontractual para adquirir bienes o servicios que se encuentren estandarizados con las mismas características técnicas; hecho lo cual, los proveedores llegan a una fase de puja en la que se adjudicará al proveedor que oferte el menor precio. (López, 2015, p. 22)

Es importante resaltar que para realizar el procedimiento se deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales, los cuales son; en primera medida, se necesitan proveedores altamente calificados y que cumplan con las exigencias previstas en el pliego de condiciones. En una segunda medida, se debe competir única y exclusivamente por medios electrónicos a través de la página web oficial que se conoce como SECOP II. Además, se debe competir por el menor precio posible de manera pública y anónima con el fin de que el proveedor que gane sea idóneamente adjudicado.

En efecto, la subasta inversa electrónica se encuentra permeada de unos principios esenciales que se pueden evidenciar perfectamente cuando se realiza un contrato de licitación pública a través de una subasta en la modalidad electrónica. A saber, el principio más relevante es el de transparencia. En todo caso, se establece que todo proceso será publicado debidamente en la página web con el fin de surtir correctamente el principio y que además, los oferantes y cualquier ciudadano podrá acceder a la información allí consignada sin ningún requisito e inconveniente adicional, es decir, se torna un procedimiento de conocimiento público. Asimismo, esto quiere decir que todas las actuaciones y pronunciaciones emitidas por las autoridades competentes también serán publicadas por este sitio web. (Troncoso, 2015).

El segundo principio acorde con la subasta inversa electrónica en los procesos de Licitación Pública es el de economía. Esto garantiza que los procesos se realicen estrictamente con las etapas necesarias y condiciones específicas en el pliego de condiciones. Es decir, que entre menos recursos se utilicen mucho mejor. Además,

La entidad departamental debe asegurarse de contar con presupuesto necesarios. Además análisis o estudios que permitan establecer el objeto a contratar es necesario. No se necesitaran tramites adicionales a los pre-establecidos, es decir, la licitación la ganara el ofertante con la mejor propuesta, la decisión no debe ser debatida o sometida a votación por un ente administrativo superior de la entidad. (Troncoso, 2015, p. 6)

Otro de los principios es el de responsabilidad se le atribuye a ambas partes en el contrato, en donde deben obrar con total rectitud y los funcionarios públicos que se encuentren en sus debidas funciones deberán velar por el adecuado cumplimiento de todas las condiciones impuestas en el proceso de subasta inversa electrónica. Con el fin esencial de proteger los derechos y hacer valer los deberes tanto para los compradores como para los vendedores. De tal manera que, “Los elementos a contratar serán según la necesidad de la entidad Departamental, sus trabajadores tendrán la función de velar, por que se cumplan las necesidades de la entidad y por la conservación de los mismos elementos” (Pérez, 2018, p. 11)

2. El Proceso de Licitación Pública

Para comenzar, se debe tener en cuenta que en el proceso de licitación pública se quiere obtener la mejor oferta, su naturaleza radica en que es por esencia un procedimiento de carácter público en donde mediante un proceso de selección la administración interesada elabora una oferta pública o un llamado de forma general para que las partes interesadas presenten la oferta mas conveniente e idonea.

La licitación Pública en Colombia se caracteriza por ser uno de los procedimientos más completos y complejos en el marco de la contratación estatal. Además de caracterizarse por su solemnidad y ritualidad, también se encuentra reglamentada por la Ley 80 del año 1993 y por la Ley 1150 del año 2007. Este proceso se divide en tres etapas, las cuales son; pre-contractual, contractual y pos- contractual. La primera fase denominada pre- contractual, se encuentra en concordancia con la “forma directa y específica con el contrato a celebrar. Esta etapa se caracteriza por la planificación o planeación en la elaboración de los pliegos de condiciones...” (Alarcón, 2010, p. 20)

Se debe tener presente que en esta etapa se presentan los estudios previos, que son básicamente los documentos de soporte que se emplean para elaborar el proyecto de los pliegos de condiciones, es muy importante dado que es el primer paso a tomar. Allí se debe consignar específicamente la necesidad que quiere desarrollar la entidad pública correspondiente con el proceso respectivo. Como segundo paso, se debe hacer un registro en el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal más conocida como SICE. Posteriormente a ello, se debe realizar un registro único de precios de referencia más conocido como RUPR, que en definitiva es una lista de precios, elaborada por la misma entidad estatal que se encuentra interesada y además es de obligatorio cumplimiento. Después de tener estos pasos listos, se deben establecer unos ítems, determinar los permisos y licencias o autorizaciones requeridas en caso de necesitarse.

Adicionalmente a ello, es necesario que dicha entidad estatal logre establecer todos los posibles impactos ambientales que se puedan suscitar si existe lugar a ello, para más adelante, elaborar una consulta sobre impuestos y un análisis del mercado para así llegar a la elaboración del presupuesto; que funge como un requisito indispensable para desempeñar de la mejor manera el sistema de compras públicas. Es pertinente determinar el sistema de precios para poder seleccionar una forma de pago y para finalizar, hay que estimar los ajustes necesarios, escoger el proceso de selección del contratista, verificar la apropiación

presupuestal, programación en la contratación y programación del desarrollo del contrato. Es pertinente aducir que para realizar el proceso de licitación pública se deben llenar plenamente todos los requisitos anteriormente expuesto ya que con ello se llena la totalidad de las necesidades en la etapa pre contractual y de esta manera, se puede pasar a la etapa contractual del proceso. (Gutiérrez, 2019)

Antes de la etapa contractual es indispensable consignar el pliego de condiciones, en otras palabras, el pliego se caracteriza por ser un documento de índole contractual. De tal manera que se garantizan los derechos, responsabilidades y obligaciones de las partes contratantes, es decir, que absolutamente todo debe quedar respaldado en el pliego de condiciones para que puedan surtir efectos jurídicos, consecuencias, sanciones y hacer valer el cumplimiento de dichas condiciones. Se debe tener en cuenta que para que se surta el principio de publicidad se debe surtir como corresponde en la respectiva página web. Posteriormente a ello, se deberá realizar la selección del contratista “De acuerdo con la forma y procedimiento de selección: licitación por convocatoria pública, por invitación pública y por orden de servicios” (Alarcón, 2010, p. 21)

En la etapa contractual fundamentalmente se elabora la adjudicación del contrato, de acuerdo con el lleno de todos los requisitos anteriores se podrá escoger una oferta realmente idónea y transparente, esta etapa se realiza por medio de un:

Acto administrativo motivado de adjudicación del contrato, y es con éste que se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos y, en el evento de no haberse realizado en audiencia pública, se comunicará a los no favorecidos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. (Alarcón, 2010, p. 22)

En suma, dicho acto administrativo en donde se adjudica en definitiva el contrato estatal deberá ser irrevocable y obliga irremediabilmente a ambas partes para que realicen el cumplimiento de sus obligaciones, este acto tampoco es susceptible de recursos específicamente en vía gubernativa. Esto quiere decir que, la adjudicación se torna completamente vinculante. Sin embargo, en el contrato deberán establecerse unas cláusulas obligatorias esenciales para el contrato mismo y que permitirán su plena validez. Un ejemplo claro de una cláusula de obligatoriedad es estipular una reversión en el contrato, una

terminación unilateral o terminación anticipada del contrato, declaratoria de caducidad, entre otras. Aunque, se debe tener en cuenta que; “El contratista tiene derecho a renunciar a la ejecución del contrato si se introducen modificaciones que afecten un 20% o más del valor inicial” (Alarcón, 2010, p. 22)

Por último, en la etapa postcontractual se encuentra la liquidación del acto que formaliza la culminación del contrato, es importante resaltar que este procedimiento al igual que los demás se debe realizar siguiendo unos requisitos determinados.

3. La subasta inversa electrónica en los procesos de licitación pública

La modalidad de selección ya conocida como licitación pública, ostenta una herramienta y garantía conocida como la subasta inversa en la modalidad electrónica, para poder desarrollar un contrato estatal de la mejor manera posible. Su naturaleza jurídica se sustenta en la idea que hace más ágil todo el procedimiento y menos dispendioso ya que se virtualiza absolutamente todo el procedimiento. De tal manera que, si la entidad estatal decide voluntariamente realizar el proceso de licitación pública a través de esta modalidad y no presencialmente, entonces se priorizaría la rapidez y transparencia, pero eso no significa que se obtenga lo mejor en calidad (Bossano, 2019).

Además, que a diferencia de las subastas más usuales;

En una subasta inversa los vendedores compiten para ganar la puja, dando como resultado una disminución de los precios, hasta que gane el menor postor. Estos mecanismos son ampliamente utilizados en el mundo, resultando en que se deben reducir los costos y pagos por los servicios básicos o la adquisición de productos al menor precio posible... (Luna, 2016, p. 3)

Sin embargo, cabe señalar que; “la principal desventaja de la subasta inversa es que se basa exclusivamente en el precio, puede suceder que el comprador no reciba la calidad o las características esperadas, de la oferta ganadora” (Luna, 2016, p.4)

Por tal motivo, para evitar ese tipo de inconvenientes anteriormente señalados, es necesario que en el proceso de licitación pública; la solicitud de la subasta inversa electrónica se encuentre completamente bien formulada y estructurada, en donde se estipulen específicamente todas las características de los productos o servicios que se quieran solicitar, en donde se indiquen todas las condiciones, la parte que contrata, el método en que se va a

realizar con el fin de garantizar por completo la oferta y asimismo la solicitud por parte de la entidad estatal.

Por último se tiene que,

Las subastas inversas son seguras y de fácil acceso, permiten la competencia directa entre grandes, medianas y pequeñas empresas, de manera imparcial. Evitando así que los contratos y recursos del estado siempre queden en mano de los mismos proveedores, ya establecidos. Una oferta exitosa puede conducir a un mejor negocio en línea (Bahamón , 2018, p. 6)

4. Fallas en el proceso de subasta inversa electrónica

En los procesos de subasta inversa electrónica, usualmente se presentan fallas técnicas en la plataforma SECOP II. Es por esta razón que en el artículo 2.2.1.2.1.2.6. del Decreto 1082 del año 2015 se precisan algunas fallas técnicas para estos procedimientos, de la siguiente manera;

Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la Entidad Estatal debe reiniciar la subasta. (Decreto 1082, 2015)

En otras palabras quiere decir que, la entidad estatal le dará oportunidad a todos los oferentes que presenten dichas fallas y les garantizará la suspensión del proceso para posteriormente, cuando la falla se crea ya solucionada entonces se reinicie de nuevo. Sin embargo,

Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la Entidad Estatal entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma. (Decreto, 1082, 2015)

5. Principios de la contratación estatal.

La contratación estatal se encuentra permeada de unos principios claves que ayudan al desarrollo idóneo en las contrataciones públicas y que aunque la Ley 80 de 1993 no los señala

taxativamente, si se encuentran amparados por el marco legal y constitucional ya que el objetivo primordial de la contratación es poder cumplir todos los fines esenciales del Estado. Por tal motivo, es pertinente aducir que los principios son; el de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, publicidad, igualdad, concurrencia, previsibilidad, planeación, entre otros. Sin embargo, en este apartado únicamente se hará énfasis en los principios de planeación, selección objetiva y debido proceso, ya que son piezas completamente indispensables para el desarrollo de las contrataciones públicas.

5.1.Principio de planeación

Cuando se habla de la función administrativa y el desarrollo de las actividades públicas dentro del marco de la contratación estatal, es indispensable hacer referencia al principio de planeación, ya que esta figura permite ejecutar todos los tramites idóneos dentro de un proceso, es decir, toda modalidad de selección para que al final pueda ser adjudicada se debe realizar mediante la planeación de actividades, a través de un pliego de condiciones que estipula todos los requisitos que se necesitan para llevar a cabo un determinado proceso. Es importante aclarar que;

Este principio no fue consagrado en el Estatuto de Contratación Pública (ley 80 de 1993), de manera taxativa, en virtud de que la estrecha relación con otros principios (transparencia, responsabilidad y economía) siendo su esencia y existencia fruto de la aplicación integral y sistemática de los demás principios. (Amaya, 2016, p. 8)

Como consecuencia de lo anteriormente estipulado, el principio de planeación tiene su respaldo en la Constitución Política de Colombia del año 1991, específicamente en el artículo 209, en donde se establece que dicha planeación pertenece al Estado social de derecho fundado en Colombia y que además, es una herramienta que se utiliza propiamente para organizar la estructura de la contratación pública. En otras palabras, este principio establece que toda entidad estatal debe realizar unos análisis y estudios con el fin esencial de planear todo el desarrollo y estructura del proceso. Además, se debe determinar

Una viabilidad técnica y económica con ello se pretende dar aplicación a la racionalidad del gasto público en concordancia con las necesidades públicas en un momento determinado, razón por la cual, previamente a la ejecución de

un contrato, la Administración debe efectuar los estudios de factibilidad, proyectos e investigaciones necesarios para determinar su conveniencia, necesidad... (Becerra, 2019, p. 11).

En consecuencia, la entidad estatal tiene un deber o una obligación en proveer de estudios el proyecto, debido a que si no se realiza una adecuada planeación entonces se estaría vulnerando el ya mencionado principio. Dicho de otra manera, se tiene que; “La planeación es inherente a la naturaleza del hombre, puesto que es un resultado de la facultad humana de pensar antes de actuar con el fin de obtener el mayor provecho”. (Rua, 2019, p. 6)

En efecto, este principio le permite a la entidad estatal proyectar unos planes que ayudan a determinar todos los pasos a seguir de manera específica y bastante clara. Además que, al ejecutarse debidamente una planeación; se están garantizando todos los factores, fines y resultados del proceso mismo. Pues de esta manera, si se cumplen adecuadamente todos los preceptos mencionados anteriormente, se podrá realizar una adecuada defensa, y se podrán controlar perfectamente todas las técnicas que se impondrán en el proceso. Por otro lado, es importante mencionar que en la Constitución Política del año 1991 se encuentran expresamente los postulados de la planeación, materializados en el Plan Nacional de Desarrollo, allí se consignan unos planes de desarrollo territorial, se estipula el precio que se va a requerir, se proyectan todas las herramientas técnicas y mecanismos que se van a utilizar y demás preceptos que sirven de inspiración para poder organizarse y desarrollar una planeación adecuada en el marco de las contrataciones públicas. (Neira, 2018)

Asimismo, la planeación en materia de contratación estatal también se tiene como un instrumento que contribuye a la gestión contractual, de tal manera que cualquier proyecto que se realice en las entidades estatales, no se puede salvar de realizar un proceso estratégico que posea una viabilidad tanto económica como técnica. Por esta razón, es que este principio de planeación se debe aplicar y con total rectitud, puesto que encamina todos los procesos de contratación pública a unos lineamientos de idoneidad, rectitud, fiabilidad y garantía en que realmente van a prosperar las planeaciones y estudios impuestos al inicio de cada proyecto.

De igual manera, se puede ver que “la planeación como un asunto relacionado con la economía, las finanzas públicas, la participación ciudadana y el uso de los mecanismos de control de que dispone la ciudadanía” (Rúa, 2019, p.12). Esto quiere decir que, mediante la contratación pública se pretende el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, pero

también; se quiere lograr un equilibrio para que en la práctica se logren menos riesgos en la ejecución de los contratos. Es decir, el principio de planeación se encuentra ligado a una serie de herramientas y parámetros que ayudan a un desarrollo adecuado de la contratación con la meta importantísima de que se pueda desarrollar de la mejor manera posible y que de haber riesgos, estos ya mediante la planeación puedan haber sido previsibles.

Por último, es necesario resaltar que la planeación se encuentra presente en todas las etapas de un proceso de contratación pública, las cuales son; precontractual, contractual y poscontractual. Además se tiene que si no se le brinda tributo al principio de planeación por parte de las entidades estatales, entonces los contratos no podrán ser ejecutados.

5.2.Principio de selección objetiva

Ahora bien, otro de los principios más importantes en el ámbito de la contratación estatal se conoce como el de selección objetiva, ya que a través de este principio se pueden orientar los procesos de selección. Además que también puede fungir como una regla indispensable para la contratación pública. La finalidad primordial de la selección objetiva es contribuir a una mejor escogencia de la oferta la ventajosa o beneficiosa para la entidad estatal ya que a través de esta figura también se pueden lograr los fines esenciales de la contratación y del Estado. De tal manera que; “el principio de selección deben orientar todo el contenido de los pliegos de condiciones de tal manera que su violación afecta la validez del pliego de condiciones y del proceso contractual” (Miranda, 2016, p. 7)

En otras palabras, el principio de selección objetiva permite la escogencia de la oferta más favorable para que la entidad estatal tenga ciertas garantías, de igual forma, permite alejar cualquier indicio subjetivo que se pueda tener por parte de los intervinientes o cualquier interés particular que se pueda suscitar. Por lo dicho anteriormente, la selección objetiva se torna bastante importante dentro del marco de la contratación pública ya que protege su adecuado desarrollo y permea de seguridad a los oferentes para que estos junto con el principio de igualdad puedan participar conforme a los reglamentos básicos que se disponen.

El artículo 29 del Estatuto de la Contratación Estatal, es decir, la Ley 80 del año 1993 que posteriormente fue derogado por el artículo 5 de la Ley 1150 del año 2007, establece que;

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. (Congreso de la República, 2007, Art. 5)

Conforme a lo anteriormente señalado, para poder realizar una selección objetiva garantizando adecuadamente este principio, se deben escoger o seguir una serie de requisitos los cuales son; en un primer lugar es que el interesado cuente con una capacidad jurídica para poder hacer parte del proceso, además debe contar con la respectiva experiencia que se requiere para el proyecto en concreto, debe ostentar una capacidad financiera, entre otros aspectos. En pocas palabras, se deben llenar una serie de requisitos y documentaciones para que se pueda proceder con el respectivo proceso y todas estas situaciones deben depender de la clase del contrato que se quiera suscribir o la modalidad de selección que se quiera escoger. Por otro lado, en el párrafo segundo del artículo anteriormente se menciona que;

La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (Congreso de la República, 2007, Art. 5)

Para poder racionalizar todos los criterios en mención se necesitan unos elementos de ponderación con la meta de lograr una adecuada selección objetiva, y en este procedimiento se deben tener en cuenta ciertos factores económicos, técnicos, observando la viabilidad de los elementos de calidad, realizando relaciones de costo y beneficio; todo esto teniendo en cuenta lo consignado en el pliego de condiciones.

En consecuencia, es importante expresar que las condiciones que se encuentran inmersas dentro del marco de la selección objetiva son disposiciones habilitantes que sirven en la presentación de las propuestas. Sin embargo, en este punto no corre una puntuación. Debido a que las exigencias de las puntuaciones se encuentran únicamente basadas en los criterios económicos y técnicos de cada propuesta, con el fin primordial de que cada proponente pueda

tener la facultad de realizar las propuestas de una manera más clara y adecuada (Mantilla, 2014).

No obstante, se debe mencionar que en la Ley 1150 del año 2007 aduce que al ser la selección objetiva aplicable a todos los modelos de selección, se torna de mucha importancia aclarar que para el proceso de Licitación Pública en particular es muy fundamental este principio. Y lo anterior se debe a que dadas las disposiciones y etapas de la Licitación, se permite una aplicación amplia de cada uno de los principios y esto se debe a que; “es un procedimiento de formación del contrato, que tiene por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para los fines de interés público, que se persiguen con la contratación estatal, es decir, la *ratio iuris*” (Mantilla, 2014, p. 14). En otras palabras, se quiere perseguir al contrato que se pretenda ejecutar y este a su vez; debe garantizar que la administración pública logre con todas las posibilidades o garantías de idoneidad en casa operación allí sumergida. Es decir, que se tenga un gran nivel de acierto y claridad en todos los pasos del proceso a realizar (Miranda, 2016).

Se trae a colación la modalidad de selección de la Licitación Pública puesto que para el objeto del presente escrito, se pretende resaltar como esta modalidad cuenta con unas exigencias particularmente diversas en comparación con las demás, y es así como;

la licitación permite que todo el que quiera participar lo haga, comparándose las distintas ofertas en igualdad de condiciones; sin embargo, la escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es otra que la de asegurar la prevalencia del interés general, valor fundante del Estado colombiano. (Mantilla, 2014, p. 9)

Para concluir con este apartado, es indispensable mencionar que el fin esencial del principio de selección objetiva es prevalecer el interés público, es ayudar a la contribución de los fines esenciales del Estado. Por tanto, esta figura se considera un imperativo de obligaciones que se encuentra amparada en el marco constitucional y legal Colombiano. Adicionalmente a ello, este principio se encuentra completamente ligado a los principios de transparencia, responsabilidad y economía. Ya que por un lado, el principio de transparencia es el encargado de establecer la imparcialidad dentro del proceso de contratación pública,

ampara la objetividad e igualdad en las condiciones de los interesados. Todo lo anterior se basa en una tarea específica, la cuál es lograr el cumplimiento de las funciones públicas y del interés general.

5.3. Debido proceso

El debido proceso es un principio que se encuentra amparado a nivel constitucional y tiene su trascendencia en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia del año 1991, de tal manera que a través de este mecanismo se garantizan todos los procesos realizados en Colombia. Además, esta figura también se encuentra respaldada como un derecho fundamental que tiene todas las personas para que se haga cumplir un determinado proceso so pena de ser tutelable en dado caso de que pueda llegar a ser vulnerado. Es decir que;

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (Constitución Política, 1991, Artículo 29)

En consecuencia, el debido proceso en materia de contratación estatal funge como una garantía para que los particulares puedan gozar de cierta seguridad jurídica a la hora de poder contratar con una entidad pública. De tal manera que dentro del marco de la contratación estatal y sumado el principio del debido proceso, las actuaciones se deberán llevar a cabo sin saltarse ningún lineamiento que pueda quebrantar las garantías de los interesados. Esta figura se encuentra presente en todas las etapas del proceso hasta su adjudicación. Lo anterior se debe a que; “en el Estado Social de Derecho, la formación de voluntad para la celebración de contratos que celebre el Estado debe estar fundamentada en el debido proceso, el cual se desarrolla en los procedimientos que establezca el ordenamiento jurídico” (Chaves, 2015, p. 24)

Conforme a lo anteriormente estipulado, se tiene que el debido proceso es un pilar fundamental en la etapa precontractual, contractual y poscontractual dentro del marco de la contratación estatal, ya que esta figura tiene que estar presente en todas las actuaciones que

se realicen porque de lo contrario no se estarían garantizando los derechos e intereses de todas las personas interesadas en adjudicar un contrato de índole estatal. De tal manera que;

Los procesos de licitación pública, selección abreviada, contratación directa, concurso de méritos y mínima cuantía necesariamente deben agotar unos momentos previos para el perfeccionamiento del contrato. Incluso en aquellos casos en los cuales se invoca una urgencia manifiesta para la satisfacción de necesidades del Estado, sus autoridades deben agotar un procedimiento previo que justifique esta expresión de voluntad. (Chaves, 2015, p.27)

Esto significa que para proteger y garantizar el principio del debido proceso, es indispensable que en cada etapa dentro del proceso se asignen unos términos y requisitos para lograr realizarlos al mejor tiempo posible y con el fin de que el proceso no se convierta en algo infinito. Adicionalmente a ello, este principio se encuentra íntimamente ligado al de legalidad, en la medida en que este también hace parte integral de las etapas respectivas dentro de un proceso de naturaleza estatal.

6. Cumplimiento de los principios al utilizar la subasta inversa electrónica.

De acuerdo a lo anteriormente estipulado, se ha logrado establecer que dentro de cada etapa de un proceso de contratación pública se hace necesario la presencia de unos principios claves con el fin de garantizar los fines esenciales del Estado; y también garantizar los intereses de la entidad estatal, haciendo más justo y correcto el proceso. De tal manera que en este apartado es preciso hablar acerca de la subasta inversa electrónica empleada particularmente en los procesos de Licitación Pública, en donde también deben hacer parte fundante los principios amparados constitucional y legalmente; para que se realice una ídnea trayectoria en el marco del proceso mismo.

Por un lado, es pertinente aducir que al emplear la subasta inversa electrónica en un proceso de licitación pública tiene unos beneficios que le aportan positivamente a la contratación estatal, pues a través de esta figura se consolida el principio de transparencia, específicamente en la página web oficial conocida como SECOP II. Mediante la cual, los oferentes y los ciudadanos en general tienen el derecho de acceder a la página cuando lo consideren necesario y sin ninguna dificultad. Puesto que, todos los procesos llevados a cabo concernientes a la contratación pública; son del dominio de la comunidad, el principio de transparencia le aporta fiabilidad a la contratación estatal ya que todas las publicaciones se

verán a través de la página y de forma oportuna. Además es muy importante tener en cuenta que;

El principal fin de la subasta inversa, es la disminución del gasto público por parte de la entidad departamental, está determinado por: la agilidad del comprador en definir el bien o el servicio adquirir, mediante una caracterización clara del mismo, y lograr pluralidad de los oferentes participantes y que estos compitan entre ellos por obtener la puja (Luna, 2016, p. 7).

Para poder continuar, es necesario aclarar que el principio de transparencia se caracteriza principalmente por ser una necesidad en cada proceso de selección, mediante la cuál toda la información obtenida del contratista se realizará de manera pública, con el fin particular de que cualquier persona que se sienta interesada; podrá acceder a la información ya que de esta forma se garantizan idóneamente todas las etapas del proceso. Es importante aducir que el principio de transparencia se encuentra bastante ligado con otros principios tales como; la buena fe, responsabilidad, igualdad, publicidad, entre otros. En otras palabras, cualquier entidad estatal debe proveer de herramientas y mecanismos para garantizar que la información publicada es completamente correcta. Además, todas las decisiones estipuladas dentro de los procesos deben estar correctamente motivados, con el objetivo de salvaguardar el desarrollo del proceso y aportar claridad al procedimiento. (Rico, 2015)

El principio de transparencia se encuentra consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 del año 1993, en donde explican todas las actuaciones y posiciones que deben optar las entidades públicas. De tal manera que el principio;

Comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones... (Rico, 2015, p.16).

En consecuencia, como ya se ha venido mencionando a lo largo del presente escrito; el principio de transparencia se encuentra completamente ligado al de publicidad, ya que existe una extensión que;

Se hace del Principio de Publicidad dentro del Principio de Transparencia; el hecho de hacer públicos los procedimientos significa que hay un sometimiento a un control social, que al hacer énfasis en la publicidad de los actos se está atacando de manera directa a la corrupción y por lo tanto impide que la contratación se convierta en un negocio. (Rico, 2015)

En efecto, es preciso reiterar que este principio juega un papel bastante importante en la contratación pública y que además se materializa adecuadamente en los procesos de Licitación Pública realizados mediante subasta inversa en la modalidad electrónica; ya que las entidades estatales pretenden facilitar toda la información del SECOP II a todas las personas que puedan estar interesadas.

Ahora bien, otro de los principios que se materializa empleando la modalidad de la subasta inversa electrónica es el de publicidad. Este cumple un papel fundamental ya que se deben mostrar todos los procedimientos que realizan las entidades. En efecto, se encuentran en toda la obligación de publicar todos los avances de los procesos en general. En consecuencia, se tiene que;

Como hemos dicho a lo largo del artículo, el principio de transparencia es un principio rector dentro de la contratación estatal colombiana, y en su aplicación desarrolla otros principios, (publicidad, selección objetiva, igualdad); fue la base del legislador para promulgar la Ley 1150 de 2007 y es el medio de control directo que combate la problemática de la corrupción. (Rico, 2015, p. 47)

Hacer efectivo el principio de transparencia y el de publicidad le otorgan una gran importancia a la contratación estatal, pero sobre todo; blindan de seguridad a los procesos de licitación pública que se realian a través de subasta inversa electrónica. Además,

permite que los proponentes ejerzan su derecho de contradicción e impone a las entidades el deber de dar respuestas oportunamente a las dudas o inconformidades de los interesados y de igual manera, tiene una gran importancia porque garantiza que los procesos se lleven a cabo bajo la igualdad de oportunidades (Rico, 2015, p.44).

Para terminar se puede aducir que la subasta inversa electrónica incentiva la contratación pública por dichos medios, además que como se pudo evidenciar anteriormente, los

principios que permean toda la contratación estatal, y brinda agilidad a los procedimientos, es decir, eficiencia y eficacia en la utilización de esta herramienta. En donde la subasta es un instrumento idóneo, ya que;

Su estructura permite que sean los proveedores los que revelen al Estado contratante quiénes tienen la mejor valoración del contrato al presentar una oferta en el concurso, y ello, sumado al precio último con el que están dispuestos a competir, demuestra que tienen una percepción favorable de las condiciones del negocio que les permite proyectar una utilidad sobre el mismo. (Safar, 2016, p. 8)

Para resumir, la subasta inversa electrónica dentro del marco de la licitación pública también puede fungir como un mecanismo que evalúa el precio del menor tiempo que se consume y por tal motivo, se torna el menos costoso para el ámbito de la contratación estatal.

Conclusiones

Como se pudo evidenciar a lo largo del escrito, se puede concluir que ejecutar un contrato estatal específicamente el de Licitación Pública mediante la subasta inversa electrónica si cumple con todos los principios de la contratación estatal que se encuentran amparados legal y constitucionalmente, en aras de prevalecer los fines esenciales del Estado. Si bien es cierto, la subasta inversa electrónica es una figura poco convencional comparada con la subasta inversa que se realiza en la forma presencial. Sin embargo, esta figura fue creada principalmente para dinamizar las compras públicas e incentivar los procesos de la contratación estatal. Además, que la figura pretende aportar beneficios amplios a las modalidades de selección; específicamente en lo concerniente a la Licitación Pública y a la selección abreviada. Por otro lado, es preciso mencionar que, la subasta inversa electrónica cuenta con herramientas idóneas que aportan dinamismo al proceso, ya que hace al procedimiento un poco más inteligente y novedoso en donde permite ahorrar ciertas cantidades de dinero que pueden ser empleadas en otros sectores de las compras públicas. En efecto, la Ley 527 del año 1999 le otorga seriedad y respaldo a la subasta inversa electrónica, de tal manera que regula la utilización de los mensajes de datos.

Otra de las herramientas que aporta esta importante figura es la seguridad, ya que los procedimientos con que cuenta la plataforma de las compras públicas en Colombia conocida

como SECOP II; blinda de confianza a todas las operaciones y transacciones que se puedan realizar en la modalidad electrónica. Adicionalmente a ello, el principio de transparencia juega un papel bastante importante e útil en el marco de la subasta inversa electrónica, ya que; al permitir realizar todos los procedimientos por medio de la página web, estos podrán ser de dominio de las personas que se encuentren interesadas. Como un segundo principio se encuentra el de la economía, a través de este; los procesos de licitación pública por medio de subasta inversa electrónica permiten que todas las etapas sean cumplidas de forma adecuada y sin excederse. Asimismo, el principio de responsabilidad también se cumple a cabalidad en este procedimiento estatal. De tal manera que, este principio le otorga fortaleza al procedimiento, puesto que todo el personal de las entidades estatales, tienen la obligación de vigilar el correcto funcionamiento de los contratos y de proteger los derechos de todos los interesados.

Asimismo, se debe profundizar que existen una serie de principios de la contratación pública basados en los intereses generales y necesariamente sustentados en la igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Sin embargo, es determinante tener en cuenta que por esencia la contratación pública se encuentra dividida o fraccionada en tres clases de principios. Por un lado, se encuentran los principios de la administración pública. En una segunda parte, se encuentran los principios de la contratación pública y por último, están los principios del control fiscal. Sin embargo, para efectos del presente escrito se profundizó pertinentemente en los principios específicos que consagra la contratación pública. De tal manera que, es esencial tener en cuenta que los ya mencionados fines esenciales del Estado se deben cumplir correctamente para así poder establecer una continua y eficiente prestación de los servicios y la efectividad de los derechos e intereses de todos los administrados, es decir, que prevalezca siempre el interés general sobre el particular.

Dicho lo anterior, se tiene que al aplicar los principios constitucionales también se deben cumplir unos principios esenciales consagrados en el estatuto contractual de la contratación estatal, los cuales son; transparencia, economía y responsabilidad. Es así como la subasta inversa electrónica respectivamente cumple con los tres principios anteriormente descritos, en donde para garantizar el principio de transparencia se deben amparar una serie de procesos públicos, que por regla general se deben adelantar a través del proceso de licitación pública, en donde este principio pone como fundamento el interés colectivo y

ayuda a que en el proceso de selección realmente se cumpla con el requisito de obtener la propuesta más favorable entre todos los oferentes.

En consecuencia, en cuanto al cumplimiento del principio de economía, se tiene que; la subasta inversa electrónica si le aporta más economía a la realización de los procesos puesto que se utilizan las herramientas necesarias e indispensables para poder llevar a cabo todas las contrataciones públicas. De tal manera que, se emplearan únicamente medios tecnológicos para poder llevar a cabo todos los procesos pertinentes. Además, en este principio es muy fundamental tener en cuenta lo plasmado en el pliego de condiciones, en donde los tiempos y los gastos tienen que estar completamente medios para no dilatar o entorpecer de alguna manera el proceso. Es importante mencionar que por esta razón existen unos términos en cada etapa del proceso, dichos términos son preclusivos y perentorios en aras de proteger al proceso mismo.

En cuanto al cumplimiento del principio de responsabilidad atribuible a través de la subasta inversa electrónica, se debe decir que por esencia este principio se debe mirar desde tres perspectivas. Por un lado, se encuentra la responsabilidad de la entidad quien debe velar porque la página web por medio de la cual se va a realizar la subasta electrónica, se encuentre completamente a disposición de los oferentes. Por otro lado, se encuentra la responsabilidad de todos los funcionarios, pues estos deben velar por el correcto funcionamiento durante el proceso y por último, se encuentra la responsabilidad de los contratistas.

Ahora bien, para finalizar es adecuado mencionar que para poder llevar a cabo un correcto funcionamiento al proceso de la licitación pública empleada a través de subasta inversa electrónica se debe añadir que; también existen unos principios consagrados en el derecho electrónico y que son específicamente atribuibles a la subasta inversa en la modalidad electrónica que emergió con la Ley 527 del año 1999. Los cuales son por esencia; el principio de equivalencia funcional, el cual permite principalmente que todos los oferentes tengan igualdad de oportunidades para presentar sus ofertas al participar en la puja dinámica. Y de igual manera, le otorga validez a los procedimientos realizados en medios electrónicos ya que estos tienen igual de importancia que los procesos o documentos escritos en el papel, en donde se garantizan todas las transmisiones de datos que se van a emplear

en la subasta inversa. Otro de los principios amparados por el derecho tecnológico y que permean a la subasta inversa electrónica, es el de la neutralidad tecnológica. Este principio es por esencia una regulación y reglamentación a todos los procesos realizados en la modalidad electrónica para que el desarrollo de la contratación a través de subasta inversa se pueda realizar de la mejor forma posible.

Lo anteriormente mencionado, hace alusión a que la subasta inversa en la modalidad electrónica para los procesos de licitación pública en el cumplimiento de todos los principios consagrados constitucional y legalmente; incentivan la contratación electrónica ya que realmente cuenta con unas bases y herramientas esenciales para el adecuado funcionamiento. Es importante mencionar que, el derecho electrónico ha evidenciado cambios bastantes fundamentales puesto que los instrumentos informáticos evolucionan cada vez más. Sin embargo, todos estos mecanismos e instrumentos han servido de utilidad en la práctica. De tal manera que favorecen el adecuado funcionamiento de los acuerdos contractuales y además blindan de seguridad, autonomía y eficiencia a todos los procesos realizados por esta modalidad. Ya que es muy importante tener en cuenta que todos los procesos realizados a través de modalidades electrónicas se tornan cada vez más prácticos y rápidos. Es preciso reiterar que, en Colombia gracias a la Ley 527 del año 1999 se pudo evolucionar más a fondo esta materia, ya que la subasta inversa electrónica maneja todo lo concerniente a los mensajes de datos y por tanto se tornó adecuado que a través de esta Ley se regularan todos los aspectos contractuales del Estado. Lo anterior significa que se le otorgó validez a la subasta inversa electrónica, con el fin esencial de que los medios tecnológicos garantizaran igualdad de condiciones en cuanto a la seriedad, responsabilidad, transparencia, publicidad, buena fe, y en general todos los principios esenciales de la contratación pública que si se cumplen en las modalidades que se encuentran plasmadas en el papel. Adicionalmente a ello, también se debe mencionar que la subasta inversa electrónica cuenta con una fuerza legal, esto quiere decir que se encuentra amparada de total legitimidad.

Para concluir es importante mencionar que el principio de planeación específicamente en los procesos de licitación pública a través de la subasta inversa electrónica juegan uno de los papeles mas indispensables a la hora de contratar ya que es la manera en como se va a desarrollar todo el proceso, cada etapa, con sus respectivos plazos, términos y condiciones,

es decir, en materia de contratación estatal se tiene que suele ser muy indispensable planear cualquier procedimiento dentro del proceso, ya que al no cumplirse el principio de planeación se estaría vulnerando el proceso mismo. Además de que este principio es complemento del principio de economía y principalmente hace referencia a todos los aspectos que se requieren previamente al inicio para la selección de los contratistas y es por esta razón que al darle cumplimiento al principio de planeación se está garantizando el interés general y la legalidad, en este orden de ideas; todas las etapas del proceso no pueden ser improvisadas. Por tal motivo, se torna una obligación planear todos los aspectos concernientes a los procesos empleados a través de la modalidad de subasta inversa electrónica.

Por otro lado, dicha modalidad también garantiza el principio de selección objetiva. De tal manera que, se debe tener en cuenta la oferta que más le favorezca a la entidad, alejando siempre la escogencia de todos los factores netamente subjetivos ya que eso alteraría el proceso y vulneraría los fines esenciales del Estado. En efecto, al emplear la subasta inversa electrónica a través de la plataforma oficial conocida como SECOP II, es que se está garantizando este principio ya que las ofertas se escogerán por esta modalidad, en donde serán completamente públicas y transparentes para que así no se tengan en cuenta intereses particulares o afectivos a la hora de elegir la oferta que más le favorezca a la entidad. Para concluir, se debe tener muy en cuenta el debido proceso ya que este se encuentra totalmente presente en todas las actuaciones y procedimientos referentes a la contratación pública. Por tal motivo, los procesos de licitación pública a través de subasta inversa electrónica no pueden ser la excepción. Es esencial mencionar que el debido proceso es una garantía para el proceso mismo.

Referencias Bibliográficas

Amaya, C. (2016). El principio de planeación en la contratación estatal, un principio no tipificado. *Revista Via Iuris*, 20, pp. 105-119
<https://www.redalyc.org/pdf/273949068006.pdf>

Alarcón, H. (2016). Contratación Estatal comparada con Argentina. Repositorio Universidad Católica de Colombia, pp. 1-32.
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/17102/1/Contrataci%c3%b3n%20estatal%20comparada%20con%20Argentina.pdf>

Bahamón, M. (2018). Elementos y presupuestos de la contratación estatal.: Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia. pp, 1-25.
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23523/1/elementos-y-presupuestos-de-la-contratacion-estatal.pdf>

Becerra, D. (2019). El principio de planeación en la contratación pública en Colombia . Repository U Santiago de Cali, p. 1- 27.
<https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/430/2/EL%20PRINCIPIO%DE%PLANEACION.pdf>

Bossano, L. (2019). La subasta inversa: Un mecanismo de contratación pública eficiente y transparente/ The reverse auction: An efficient and transparent public procurement mechanism. EBSCOhost, pp. 1- 15:
<http://web.a.ebscohost.com/ucatolica/basesdedatos/proxy.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=8ee2d362-ba32-4510-b21e-9e420466a0b0%40sdc-v-sessmgr02>

Congreso de la República de Colombia (28 de octubre de 1993). Ley 80 de 1993: Diario Oficial: 41.094.

Congreso de la República de Colombia (18 de agosto de 1999). Ley 527 de 1999: Diario Oficial: 43.673.

Congreso de la República de Colombia (16 de julio de 2007). Ley 1150 de 2007: Diario Oficial: 46.691.

Chaves, J. (2015). EL DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES*. Vniversitas , p. 1-45
<https://www.redalyc.org/pdf/825/82543859004.pdf>

González, E. (2010) Pliego de Condiciones en la Contratación Estatal, “Principios Orientadores” Bogotá D.C. Editorial Universidad Externado de Colombia. pp, 31-42.

Gutiérrez, E (2019). Reconocimiento y promoción del principio de libre concurrencia en la licitación pública a través de la normatividad colombiana. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. pp, 1-29

Lopez, L. (2015) Manual de contratación pública para contratos de obra e infraestructura vial (Inviás-IDU-UMV. Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de ingeniería. Bogotá, Colombia, pp. 1-33

Luna, L. (2016). MECANISMO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA LA DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, EN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER. Repositorio Universidad Militar Nueva Granada, pp. 1- 13.

Mantilla, C. (2014). Importancia del principio de selección objetiva del contratista en el proceso de Licitación Pública en Colombia. Revista Principia Iuris, p. 1-21.

<http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/piuris/article/view/946/916>

Montoya, C. (2012). SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA. Blogspot, pp. 1-5. Recuperado de: <http://cristianvistinmoya.blogspot.com/2012/01/definicion-de-la-subasta-inversa.html>

Miranda, M. (2016). La regla o principio de la selección objetiva en la contratación pública Colombiana. Revista Venra Iuris , p. 1-20.
<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/view/6/3>

Mosquera, M. (2018). PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS EN PROCESOS DE CONTRATACION ADELANTADOS POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA. DCpace, pp. 1-27:
<https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/456/1/PRECIOS%20ARTIFICIALMENTE%20BAJOS.pdf>

Neira, C. (2018). Modelo conceptual para la presentación de ofertas de contratación pública a través de la plataforma virtual SECOP II. Trabajo de Grado : Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia. pp, 1- 27.

Pérez, A. (2018). LA CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA SUBASTA INVERSA, UN ESTUDIO DE REVISIÓN EN COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR. Repositorio Universidad Católica de Colombia, pp. 1-29.
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/8259/4/trabajo%20de%20grado.pdf>

Rico, B. (2015). El principio de transparencia como lucha contra la corrupción en la contratación estatal colombiana. Repositorio Universidad Católica de Colombia., pp. 1-57.
<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14358/4/EL%20PRINCIPIO%20DE%20TRANSPARENCIA.pdf>

Rua, M., Restrepo, J & Castro, H. (2019). La planeación en los contratos de obra pública en Colombia ¿principio, deber o requisito? obligatoriedad y consecuencias de su inaplicación. Ebscohost, p. 1-24
<http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=b73bdf9d-53ef-41c4-aba6-a56a8d2c6e71%40sessionmgr4007>

Safar, M. (2016). ¿Hay ventajas en el mecanismo de subasta para la contratación pública en Colombia? . Revista Digital de Derecho Administrativo, p.1- 133.
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/4596/7523>

Troncoso, M. (2015). El precedente judicial y el principio de legalidad penal en la contratación pública colombiana. Revista Academia & Derecho, 6(10), pp. 91-118.